
El terrorismo de Estado por Graciela Etchevest

El concepto

El terrorismo de Estado es un tipo de terrorismo que, cómo es evidente, esta ejercido por el Estado. No toda acción violenta es reconocida cómo un acto terrorista, ya que estos son solo los casos en los que, mediante el uso o la amenaza de la violencia se busca cumplir un objetivo (sea este de cualquier ideología, religión, índole, etc). Generalmente, el terrorismo de Estado no nace de la noche a la mañana, sino que esta vinculado a un plan sistematico y planificado para alcanzar la meta buscada.

Si bien el monopolio de la violencia es otorgado al Estado para que este busque la plena organizacion de la sociedad, cuando se recurre al terrorismo de Estado lo que se esta haciendo es contradecir al mismo. El Estado no debe violar sus propias leyes y normas, ya que vela por proteger y garantizar la plena ciudadanía dentro de su territorio.

Por último, cabe resaltar que estas acciones suelen estar veladas por cierto sector de la sociedad (ya que de no ser este el caso no durarán mucho). Suele existir un sector beneficiado o, en su defecto, el control sobre la sociedad es tal que los ciudadanos creen en la causa por la que vela el Estado. Ambos casos pueden existir en simultáneo, aunque lo más común es el segundo, bajo el lema de *si no estás con nosotros, estás con los enemigos*.

En la Argentina

En los años sesenta y setenta, en Estados Unidos existía la Escuela de las Américas, que funcionaba cómo la escuela del ejército. Muchos militares latinoamericanos formaron parte de la misma, y se les dio la misión de regresar a sus países para controlar y erradicar la plaga que a Estados Unidos tanto lo aterraba: la amenaza comunista. Esta es la causa de la mayoría de los actos terroristas por parte del Estado en latinoamérica.

En esta época la idea de que la violencia se podía resolver con mayor violencia estaba ya bastante extendida por toda América. Esto provocó que sea más fácil para los militares actuar contra el Estado y los movimientos comunistas. Tanto es así, que incluso en la tercera presidencia de Perón se mandaba a “aniquilar” a la oposición.

En el caso de Argentina, en el año 1976 comenzó la época más brutal de la que el país sería testigo, siendo uno de los actos terroristas por parte del Estado más sangrientos y devastadores. Se raptaban las personas opositoras al sistema y se los trasladaba a centros clandestinos de detención en los que se los torturaba y se los interrogaba para buscar a más opositores. También secuestraban a los niños y se los entregaban a otras familias, cambiandoles la identidad. Se habían violado no solo las leyes de la constitución, sino también los derechos humanos.

Toda esta situación, siendo tan terrible cómo suena, fue apoyada (e incluso acompañada) por sectores de la sociedad. Y esta ayuda era indispensable para mantener un plan de tal magnitud. A pesar de todo esto, existieron y siguen existiendo organizaciones y agrupaciones que buscan ayudar a las personas que pasaron por dicha situación, o buscan a los nacidos desaparecidos (por nombrar algunas: las abuelas de Plaza de Mayo, la asamblea permanente por los Derechos Humanos, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otros).

Transición a la democracia por Nicolas Simone

La transición, sus actores y sus pactos

Se le llama transición al lapso de tiempo entre un cambio de regímenes, más específicamente desde uno no democrático a uno democrático. Este cambio suele ser extremadamente conflictivo, ya que trae consigo un cambio en las reglas de acceso y ejercicio del poder. El objetivo del cambio es volver a la democracia, o a la poliarquía mejor dicho, recuperar las distintas libertades y obligaciones de los ciudadanos y que las mismas vuelvan a la normalidad.

Para lograr estos cambios, existen distintos actores dispuestos en el juego. Por un lado, tenemos a la “elite política” (la cual está conformada por los que fueron expulsados del poder tras el golpe de Estado). Esta elite habitualmente desde el momento cero de la transición ya comienza a una especie de conspiración contra los golpistas, esto ocurriendo cuando los mismos empiezan a perder poder sobre la sociedad. Otro factor importante son los mismos ciudadanos (incluidas sus organizaciones), ya que son los que suelen presionar a favor de la democracia. Debido al aumento de la debilidad de poder por parte de los golpistas la participación activa de la sociedad y la respuesta política comienza a estar más presente en el día a día. En tercer lugar, los llamados “blandos” son aquellos que pertenecen o apoyan el régimen dictatorial, pero en el momento de la transición se encuentran a favor de la vuelta de la democracia. Podría resumirse en el arrepentimiento. Como cuarto actor existen los nostálgicos del régimen autoritario, los cuales (cómo dice su nombre) son los que están en contra de la vuelta de la democracia. Estos son grupos que se muestran reacios ante la pérdida de poder por parte de los golpistas, ya que apoyan sus ideales. En último lugar, están los “actores internacionales”, los cuales son las distintas organizaciones o agrupaciones que trabajan fuera de las fronteras del país. El ejemplo más conocido podría ser la ONU, la cual garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en los distintos países en el mundo.

Una llamada élite política (es decir, aquellos actores que se reconocen cómo parte del elenco político de un país, por ejemplo, alguien que toma el cargo a falta del presidente) es la encargada de tomar las distintas decisiones para poder llegar a la

democracia. Muchas veces se recurre a los pactos con los actores sociales antes mencionados. Estos pactos pueden ser variados, y pueden ser secretos o públicos, por ejemplo se puede acordar que no habrá proscripciones, o las fechas y la modalidad de las elecciones.

Para poner a prueba todo lo visto vamos a analizar dos ejemplos clave: España en 1975 y Argentina en 1982.

España

El caso del país vasco es tomado cómo un excelente referente en cuanto a transición a la democracia, ya que supo manejar la situación política, económica y social de la manera más estable posible, aparte de poder lograr su cometido. Tras la muerte del dictador del momento, Francisco Franco, fue Juan Carlos I el que tomaría el cargo del país, y fue el que devolvería el régimen democrático al mismo. El proceso fue lento y gradual; no fue hasta 1982 que se consideró la transición cómo finalizada.

Otro factor importante fue Suarez, el cual decidió legalizar y otorgarle la libertad de postularse al partido opositor: el partido comunista. Esto fue un gran revuelo, aunque fue para bien, ya que la democracia sería lo más amplia posible. Si bien el partido comunista no apoyaba para nada la idea de tener un rey al mando, terminaron pactando lo dicho ya que les daba la posibilidad de entrar a elecciones.

Por último, cabe destacar la presencia de Felipe Gonzales, el cual fue uno de los candidatos para las elecciones de 1982, y terminó ganando. Se apoyó en los gobiernos de otros países, cómo Alemania o Suecia, lo cual mejoró mucho su imagen dentro de España. Él pertenecía al partido socialista obrero español.

Lo más destacable del caso de España fue que los distintos actores sociales confiaron entre ellos y tomaron decisiones difíciles y arriesgadas, pero lograron mantener la estabilidad y alcanzar uno de los momentos más plenos de España (1982-1986).

Argentina

En 1982, Argentina perdió la guerra de las Malvinas, comenzando el proceso de transición a la democracia. Esta pérdida le costó una fuerte cantidad de confianza por parte de la sociedad, lo cual se traducía a una pérdida en el poder. Tras una fuerte exigencia y presión gracias a los ciudadanos y la elite política el entonces presidente, Leopoldo Galtieri, renunció a su puesto y le cedió el poder a Reynaldo Bignone. Este último convocó inmediatamente a elecciones, ya que no podía hacer mucho más en la situación en la que estaba.

Los políticos argentinos, a diferencia del caso español, no buscaron una salida pactada entre los distintos actores. Una vez llamadas a las elecciones, los distintos partidos combatieron entre sí para ver quien obtenía el poder. No existieron acuerdos sobre qué hacer con los militares, o sobre planes económicos concretos.

En 1983 asumió el poder Raul Alfonsín, un radical que criticaba fuertemente al gobierno de los golpistas militares. Los militares seguían insistentes e hicieron tres intentos de levantamiento contra Alfonsín, y un cuarto contra Carlos Menem (el presidente siguiente a Alfonsín). Menem resolvió el asunto de raíz, reprimiendo a los militares e insultándolos para dejarlos en libertad. Desde aquel entonces las fuerzas armadas ya no representan una amenaza.

Genocidio: concepto polémico y necesario por Javier Pablo Hermo

La polémica historia del genocidio

La idea de genocidio empezó a surgir aproximadamente desde 1950 en adelante, y es muy difícil hasta día de hoy ponerse de acuerdo en cuanto al significado. Según la ONU, se reconoce como genocidio a cualquier práctica que busca de forma intencionada la destrucción total o parcial de un grupo humano, sobre la base de razones raciales, nacionales, ideológicas, políticas o sociales, sin importar el ente que ejerza dichas actividades.

Esta idea de genocidio se puede ver a lo largo de la historia de la humanidad, aunque según distintos pensadores cambia lo que es denominado genocidio. Muchos pensadores toman como punto de partida del inicio del siglo XX, siendo los más destacables los genocidios de la primera y la segunda guerra mundial, por parte de los turcos y los nazis, respectivamente. Conquistas como la de América o India consistieron de prácticas genocidas contra los nativos de dichos lugares.

Las dictaduras sucedidas en Latinoamérica entre 1960 y 1980 son consideradas en su mayoría como actos genocidas, ya que se planteó la destrucción parcial o total de un sector de la sociedad. Según ciertos pensadores, el único acontecimiento que se le puede considerar un genocidio es el ocurrido en la segunda guerra mundial, ya que este poseía un trasfondo mucho más planificado, utilizando fuertemente el método científico para averiguar los métodos más baratos, rápidos y eficientes de exterminio.

En Argentina

El caso de Argentina tiene muchos ejemplos de genocidios (lo cual no es causa de orgullo) a lo largo de su historia, aunque aquí veremos los dos más grandes: la conquista del desierto y la dictadura de 1976.

La primera ocurrida a finales del siglo XIX, se resume en básicamente la conquista de nativos y sus tierras por parte del sector político del momento. Finalizó en 1880, cuando el general Roca perdió su poder. Los sobrevivientes pasaron a ser servidumbre de lo que vendría después. El segundo caso fue un golpe de Estado por parte de los militares. En ese momento se perseguía y desaparecía a los opositores del grupo al mando, torturándolos o asesinandolos, incluso violaban a las mujeres y las separaban de sus hijos.

Capítulo VI (1966-1976) de la Breve historia contemporánea de la Argentina por Luis Alberto Romero

La vuelta de Perón

1973: Perón retornó al país. Un enfrentamiento entre grupos armados de distintas tendencias del peronismo provocó una masacre. Cámpora renuncia y asume la presidencia Lastiri.

Perón armó su proyecto sobre tres bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los grandes representantes corporativos y una conducción más centralizada de su movimiento. Para que funcionara, Perón necesitaba que la economía tuviera un desempeño medianamente satisfactorio y que pudiera reforzarse el poder del Estado. Este era un punto débil: los mecanismos y los instrumentos estaban desgastados y resultaron ineficaces, y el control que Perón podía tener no era pleno, pues las Fuerzas Armadas se mostraban reticentes. El programa de Reconstrucción y Liberación Nacional consistía en un intento de superar las limitaciones al crecimiento de una economía cuyos rasgos básicos no se pensaban modificar. Los objetivos de Perón eran fuertemente intervencionistas y nacionalistas y distribución de citas. Se esperaba apoyar el crecimiento de la economía en una expansión del mercado interno y del crecimiento de las exportaciones.

El Estado aumentó considerablemente sus gastos a través de obras sociales e incrementó el número de empleados públicos y de empresas del Estado; contribuyó así a activar la economía interna.

Los primeros resultados de este programa de estabilización fueron espectaculares. La inflación se frenó y las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimularon el aumento de la actividad interna. Pero el incremento del consumo hizo reaparecer la inflación, mientras que el aumento del precio del petróleo en el mundo encarece las importaciones e incrementó los costos de las empresas.

Isabel se propuso homogeneizar el gobierno, colocando a amigos en puestos clave y rompiendo una a una las alianzas que había que había tejido Perón con los militares y empresarios.

1975

Una crisis económica trae problemas de la balanza de pagos, inflación desatada y Estado desbordado. Movilizaciones y paro general. La CGT encabezaba la acción contra el gobierno peronista. El gobierno entró en su etapa final.

La estrategia de Perón contra quienes lo expulsaron del poder consistía en utilizar a los jóvenes y a los sectores populares para hostigarlos. Desde 1975, el Ejército, convocado por la presidenta, asumió la tarea de reprimir la guerrilla tucumana. El genocidio estaba en marcha. El gobierno peronista se acercaba a su final. La crisis económica preparó la crisis política.

Capítulo VII (1976-1983) de la Breve historia contemporánea de la Argentina por Luis Alberto Romero

El proceso

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el Gral Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado "Proceso de Reorganización Nacional" y designó presidente de la nación a Videla, quien además continuó al frente del Ejército hasta 1978.

En 1981, fue reemplazado por el Gral Roberto Viola, quien renunció a finales de ese año. Su sucesor, el Gral Leopoldo Galtieri, renunció a mediados de 1982, luego de la derrota de la guerra de Malvinas. El Gral Bignone convocó a elecciones en octubre de 1983 y entregó el mando al presidente electo, Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre.

La economía imaginaria: inflación y especulación

Esta transformación fue conducida por José Martínez de Hoz, ministro de economía durante los 5 años de presidencia de Videla. Cuando asumió, debía enfrentar una crisis cíclica aguda complicada por la crisis social y política y el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. La represión inicial, sumada a una política anti crisis clásica permitió superar la coyuntura. Pero esta vez las Fuerzas Armadas y los sectores del "establishment" que las acompañaban pensaban ir más lejos. En su diagnóstico, la inestabilidad social y política crónica nacía de la impotencia del poder político ante los grupos corporativos que se enfrentaban generando desorden o caos o se unían para beneficio. Una solución de largo plazo debía cambiar los datos de la economía, y así modificar esa configuración política y social crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento si no la del orden y la seguridad. Invirtiendo lo que hasta entonces habían sido los objetivos de las distintas fórmulas políticas, se buscó solucionar los problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a costa del propio crecimiento económico.

Según un balance que progresivamente se imponía, el Estado intervencionista, benefactor y prebendario, constituido desde 1931, era el gran responsable del desorden social; en cambio el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores: al final de la transformación que condujo Martínez de Hoz, el poder económico se concentró en un conjunto de empresarios, transnacionales y nacionales, que acapararon las prebendas estatales y redujeron los márgenes de la puja corporativa. Esta transformación requirió de una fuerte intervención del Estado para reprimir y desarmar a los actores del juego corporativo, para imponer las reglas que facilitarían el crecimiento de los vendedores y para trasladar hacia ellos los recursos del conjunto de la sociedad. La ejecución de esta transformación planteaba un problema político: la conducción económica debía

durar en el poder el tiempo suficiente como para que los cambios fueran irreversibles.

Martínez de Hoz contó inicialmente con un fuerte apoyo de los organismos internacionales, los bancos extranjeros y del sector más concentrado de establishment local. La relación con los militares fue más compleja, en parte por sus profundas divisiones (entre las armas y entre facciones), que se expresaban en apoyos, críticas o bloqueos a su gestión, y en parte por el peso que entre ellos tenían muchas ideas y concepciones más tradicionales. Los militares juzgaban que el control sindical y la fuerte reducción de los ingresos laborales debían equilibrarse con el mantenimiento de un elevado empleo, de modo que la receta recesiva más clásica estaba descartada. También defendieron la pervivencia de las empresas estatales. Las relaciones con los empresarios tampoco fueron fáciles, debido a la cantidad de intereses sectoriales que debían ser afectados; pero no conformaron un frente unificado. Su carta de triunfo principal fue haber colocado durante años a la economía en una situación de inestabilidad tal que un cambio de piloto garantiza una catástrofe. Cuando esto dejó de funcionar, la concentración y el endeudamiento ya habían creado los mecanismos para asegurar la continuidad de sus políticas.

Las medidas iniciales del equipo ministerial no dieron idea del rumbo futuro. Luego de intervenir la CGT y los principales sindicatos, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios. Con la ayuda suplementaria de los créditos externos la crisis cíclica se superó sin desocupación. Desde mediados de 1977, a medida que la conducción se afirmaba, comenzaron a plantearse las grandes reformas, que modificaron las normas básicas vigentes desde 1930. La reforma financiera eliminó la regulación estatal de la tasa de interés y permitió la proliferación de los bancos e instituciones financieras. El estado no dispuso ya de créditos subsidiados para asignar según sus prioridades. Las ofertas para los inversores se diversificaron. En un clima altamente especulativo, la competencia entre las instituciones financieras mantuvo elevada la tasa de interés, y con ella la inflación. En la nueva operatoria se mantuvo una norma de la vieja concepción: El Estado garantiza no solo los títulos que emitía, si no los depósitos a plazos fijos. Esta combinación de liberalización, eliminación de controles y garantía estatal generó un mecanismo perverso, que finalmente llevó a todo el sistema a la ruina.

La segunda gran modificación se produjo en diciembre de 1978 con la llamada “pauta cambiaria” adoptada después de que Videla fuera confirmado por tres años en la presidencia. De acuerdo con la nueva doctrina monetarista en boga, se trató de fortalecer la previsibilidad cambiaria y así reducir por pasos la inflación. Pero la inflación subsistió. Su efecto se sumó al de la progresiva apertura económica y reducción de aranceles, novedad en políticas económicas. La consecuencia del dólar barato y los bajos impuestos fue una inundación de productos importados a precio ínfimo, que afectó a la industria local.

La adopción de la pauta cambiaria coincidió con una gran influencia del dinero exterior, provenientes de los beneficios del petróleo. El flujo de dólares (origen del

fuerte endeudamiento externo) fue común en América Latina y en Países del Tercer Mundo, pero en la Arg lo estimuló la posibilidad de tomarlos y colocarlos sin riesgo en el mercado financiero local. Hubo mucho dinero en circulación, se obtuvieron beneficios nominales ("plata dulce"). Pero la "tablita" (pauta cambiaria) no redujo ni las tasas de interés ni la inflación a medida que la sobrevaluación del peso anticipa una devaluación. Mientras se constituía la base de la deuda externa, esta "bicicleta" se agregaba a la "plata dulce" y a los "importados coreanos" para configurar la apariencia de una modificación sustancial de la economía y sus reglas.

En el sector financiero se lograron los beneficios. Se trataba de un mercado altamente inestable. Muchas empresas compensan sus quebrantos operativos con ganancias en la actividad financiera. El Estado financió su déficit operativo y sus obras públicas con endeudamiento externo. Muchas empresas tomaron créditos en dólares y los colocaron en el circuito financiero y para devolverlos recurrieron a otros créditos; cadena de felicidad que en un momento se cortó.

El momento llegó a principios de 1980. Mientras la economía real agonizaba, la economía imaginaria del mercado financiero rodaba hacia la vorágine. Las altas tasas de interés eran inconciliables con las tasas de beneficios normales, de modo que ninguna actividad productiva resultaba rentable ni competía con la especulación. Muchas empresas tuvieron problemas. Las consecuencias de la combinación de la liberalización y garantía estatal quedaron a la vista. En marzo de 1980 el Banco Central decidió la quiebra del banco privado más grande y de otros tres importantes, que eran cabezas de sendos grupos empresarios. Para frenar la corrida bancaria, el gobierno asumió sus pasivos, que representaban la quinta parte del sistema financiero.

El problema financiero siguió agravándose, y hasta el fin del Gob militar fue constante. En marzo de 1981 debía asumir el nuevo presidente, el Gral Viola; Martínez de Hoz dejaría el ministerio y con él cesaría la vigencia de la "tablita". Finalmente el Gob tuvo que abandonar la paridad cambiaria sostenida. A lo largo de 1981, ya con la nueva conducción económica hubo una gran devaluación, catastrófica para las empresas endeudadas en dólares, a las que el Estado auxilió en 1982 y se hizo cargo de las deudas externas, aumentando su propio endeudamiento. La era de la "plata dulce" terminaba; la sociedad toda debió cargar con las pérdidas. La suba de interés de las tasas en EE.UU indicó la aparición de un fuerte competidor en la captación de fondos financieros. En 1982 México anunció que no podía pagar la deuda externa y declaró una moratoria. Fue la señal. Los créditos fáciles para los países latinoamericanos se cortaron, mientras los intereses subían y con ellos el monto de la deuda.

La economía real: destrucción y concentración

En cuanto a la economía "real" hubo un giro categórico. La idea de que el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad se asociaban con la industria y el mercado interno fue abandonada. A la producción industrial se le achacó su falta de competitividad, y se optó por premiar la eficiencia y la capacidad de competir en

el mercado mundial. Se trataba de un cuestionamiento similar al del resto del mundo capitalista, pero la respuesta local fue más destructiva que constructiva.

La estrategia centrada en el fortalecimiento del sector financiero, en la apertura y en el endeudamiento no benefició a ninguno de los grandes sectores de la economía, si no a actores individuales privilegiados. La industria sufrió la competencia de los artículos importados, el encarecimiento del crédito, la supresión de mecanismos de promoción y la reducción del poder adquisitivo de la población. Como planteó Katz, hubo una reconstrucción de la actividad que supuso una verdadera regresión. Los sectores más antiguos e ineficientes (textil, confecciones) fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados los nuevos (metalmecánico, electrónico) que habían progresado. Por entonces se producía en el mundo un avance tecnológico muy fuerte, de modo que la brecha que separaba a Arg de esa vanguardia volvió a ensancharse, ya de manera irreversible. En cambio crecieron y se beneficiaron con la reestructuración las grandes empresas elaboradas de medios intermedios (celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo, cemento, automotrices). Para ellas se mantuvieron los antiguos beneficios y promociones, propios del Estado prebendario, y se agregaron otros nuevos, para favorecer la exportación. Los mercados externos les permitieron superar las limitaciones del mercado interno.

El nuevo perfil exportador de la economía que se insinuaba se noto tmb en el sector agropecuario. Hacia 1976 culminó una verdadera revolución productiva, que multiplicó el producto. Por entonces se abrieron nuevos mercados al tiempo que el gobierno eliminará las retenciones a la exportación. Pero la sobrevaluación del peso se comió los beneficios y en 1981 el sector estaba en una situación crítica. Por otra parte, sus ingresos influyen menos en la economía general. Ya no subsidiarán a la industria manufacturera, a través del Estado, y en cambio se volcaron al sector financiero, local o externo. Luego, la caída de los precios nacionales prolongó su crisis.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa. Hubo transferencia de trabajadores de la industria a los servicios y muchos ensayaron la actividad por cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y en las obras públicas. El Gob se embarcó en una serie de grandes proyectos, aprovechando los créditos externos baratos. La presión inicial para bajar los salarios fue cediendo gradualmente, aunque la suspensión de las negociaciones colectivas posibilitó fuertes disparidades entre actividades y empresas. Pero a partir de 1981 la crisis, la inflación, y la recesión hicieron descender dramáticamente la ocupación y el salario real. En vísperas de dejar el poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro importante.

Cuando la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal consecuencia de la traumática transformación había sido, junto a la deuda exterior, una fuerte concentración económica. En este caso el principal papel no correspondió a las empresas extranjeras. No hubo nuevas instalaciones; algunas se

retiraron o se limitaron a la provisión de partes y de tecnología. Les resultaba difícil manejarse en un medio altamente especulativo, sometido a bruscos cambios en las reglas, en el que decisiones diarias significaban grandes ganancias o pérdidas. Acá los empresarios locales tenían ventaja. En estos años, junto con algunas transnacionales, crecieron de modo espectacular unos grandes grupos locales directamente ligados a lo empresario. Así, el establishment económico adquirió una nueva forma.

Los casos más espectaculares fueron los de los conglomerados empresariales, que combinan actividades industriales, de servicio, comerciales y financieras sobre todo por la búsqueda de negocios de rápido rendimiento. Los grupos que crecieron contaron con un banco o una institución financiera que les permitió manejarse independientemente en el sector en el que obtuvieron las mayores ganancias. Muchos de ellos desaparecieron luego de 1980. Sobrevivieron las que capitalizaron sus beneficios comprando empresas en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados. Lo decisivo fue establecer en torno a alguna de las empresas una relación privilegiada con el Estado.

En los años en los que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó importantes obras públicas y contrató a empresas de construcción o ingeniería pertenecientes a estos grupos. Por otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos o la realización de tareas y en torno a esas actividades se construyeron algunas de las más poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los costos al ritmo de la inflación. Otras empresas aprovecharon los regímenes de promoción, que continuaron existiendo para proyectos específicos. Estos regímenes posibilitan importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguro de cambios para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno o suministro de energía a bajo costo. De este modo muchos grupos empresarios podían construir su capital con mínimos aportes propios.

En un contexto de estancamiento, estos grupos crecieron a costa de un Estado que había pasado de la promoción general de algunos sectores de la economía a la prebenda individualizada. La colusión de intereses fue grande y desmintió el discurso del liberalismo. Los grupos acumularon una fuerza tal que en el futuro resultaría difícil revertir las condiciones en que actuaban y, junto a los acreedores extranjeros, se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.

Achicar el Estado y silenciar a la Sociedad

La reducción de funciones del Estado, su conversión en "subsidiario", fue uno de los propósitos más proclamados por Martínez de Hoz, recogiendo un argumento que circulaba en todo el mundo capitalista, donde estaban en plena revisión los principios del Estado dirigista y benefactor. Su propuesta suscitó un fuerte rechazo en buena parte de las Fuerzas Armadas, pero obtuvo una importante victoria

argumentativa, cuando ensambló la prédica de la lucha antisubversiva con el discurso contra el Estado y el industrialismo. Entre los militares había muchos que adherían a las ideas nacionalistas y dirigistas, y otros que aspiraban a sumarse a los beneficiarios del maná estatal. Por diferentes razones coincidieron en el mantenimiento de las empresas públicas y en el desarrollo de los grandes emprendimientos estatales.

En un punto coincidían quienes querían aplicar el liberalismo antiestatista ortodoxo y quienes aspiraban a monopolizar sus beneficios prebendarios: eliminar aquellos dispositivos estatales que limitaban el uso discrecional del Estado por el gobierno. Particularmente los construidos desde 1930: la regulación del crédito y de la tasa de interés, la política arancelaria y el control de cambios, que fueron suprimidos pero retomados en casos singulares. Un compromiso similar se manifestó en las empresas del Estado.

Los mejores cuadros fueron alejados, las bajas tarifas que se establecieron crearon un desastre financiero, agravado posteriormente por la recurrencia sistemática a créditos externos. La llamada "privatización periférica", realizada sin control ni regulación alguna, permitió crecer a su costa a los competidores privados. Así se endeudaron y deterioraron las empresas de servicios, hasta entonces relativamente eficientes, mientras al mismo tiempo el Estado se hacía cargo de infinidad de empresas y bancos quebrados por obra de su política económica.

Se trataba de una manera paradójica de achicar el Estado. Si ése era el verdadero objetivo, los resultados fueron los contrarios. Antes que estimular la eficiencia, el Estado premió a los que sabían obtener de él distintos tipos de prebendas, por mecanismos no demasiado diferentes de los que se había criticado. Ni siquiera mejoró la eficiencia del Estado en el campo que le era intrínseco e intransferible: la recaudación y asignación de recursos fiscales. Pese a la proclamada aspiración a lograr el equilibrio presupuestario el gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con la emisión y luego con el endeudamiento externo. Una parte importante tuvo como beneficiario directo a las Fuerzas Armadas, y otra también considerable se destinó a los grandes programas de obras públicas. Los espacios para las negociaciones espurias se multiplicaron debido a que las tres Fuerzas Armadas se repartieron prolijamente la administración del Estado y la ejecución de las obras públicas, multiplicando las demandas de recursos.

El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado "Proceso de Reorganización Nacional" supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias; pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde reside realmente el poder, pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de las Fuerzas Armadas, la autoridad del

presidente resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas. El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias (que suprimieron el Congreso, depuraron la Justicia y prohibieron la actividad política) crearon la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos, pero las atribuciones respectivas de una y otro no quedaron totalmente deslindadas, y fueron más bien el resultado del cambiante equilibrio de fuerzas. También se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, para discutir las leyes; integrada por tres representantes de cada arma. Cada uno de los cargos ejecutivos así como el manejo de las empresas del Estado y demás dependencias, fue objeto del reparto entre las fuerzas, y quienes los ocupaban dependían de una doble cadena de mandos: del Estado y de su Arma, de modo que el conjunto pudo asimilarse a la anarquía feudal antes que a un Estado cohesionado en torno del poder.

La misma anarquía existió respecto de las normas legales que el propio gobierno se daba. Existe confusión sobre su naturaleza (se mezclaron sin criterio leyes, decretos y reglamentos), sobre quién las dicta y sobre su alcance. Hubo una notoria reticencia a explicitar sus fundamentos, y en ocasiones hasta se mantuvo en secreto su misma existencia. Se prefirieron las normas legales omnicomprendivas, pero además se toleró su permanente violación o incumplimiento. Contaminado por el Estado terrorista clandestino, todo el edificio jurídico de la república resultó afectado al punto que no hubo límites normativos para el ejercicio del poder. La corrupción se extendió a la administración pública..

En suma, la Reorganización no se limitó a suprimir los mecanismos democráticos constitucionales o a alterar profundamente las instituciones republicanas, como había ocurrido con los regímenes militares anteriores. Desde dentro mismo se realizó una verdadera revolución contra el Estado, afectando la posibilidad de ejercer incluso las funciones de regulación y control básicas.

La fragmentación del poder, las tendencias centrífugas y la anarquía derivan de la escrupulosa división del poder entre las tres fuerzas, al punto de no existir una instancia superior a ellas que dirimirá los conflictos. Pero también surgía de la existencia de definidas facciones en el propio Ejército:

- En torno a los generales Videla y Viola (su segundo en el Ejército), se constituyó la facción más fuerte, pero que distaba de ser dominante. Estos jefes respaldan a Martínez de Hoz (criticado militares más nacionalistas), pero reconocían la necesidad de encontrar en el futuro alguna salida política. Así, mantenían comunicación con los dirigentes de los partidos políticos.
- Otro grupo afirmaba que la dictadura debía continuar sine die, y que la represión, ejecutada de manera sanguinaria, debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Sus figuras más destacadas eran los Grales Menéndez y Mason. En conflicto permanente con el comando del arma (con Videla y Viola) Menéndez se insubordinan de hecho varias veces (conflicto con Chile, en 1978 y de manera explícita, en 1979, lo que forzó su retiro).

- El tercer grupo lo constituyó la Marina de Guerra, firmemente dirigida por su comandante Emilio Massera, quien se propuso encontrar una salida política que lo llevara a él mismo al poder. Massera desarrolló siempre un juego propio; jaquea a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz. Se preocupó por encontrar banderas para lograr alguna adhesión popular al gobierno: el Campeonato Mundial de Fútbol y luego el conflicto con Chile, que prelude la guerra de Malvinas, también promovida por la Armada.

La puja era mucho más compleja, pero poco manifiesta. El grupo de Videla y Viola fue avanzando gradualmente en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera se anotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981 y Viola lo sucedió como jefe del Ejército. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo importante de Videla, aunque poco después Viola pasó a retiro y fue reemplazado al frente del Ejército por el Gral Galtieri. En septiembre de 1980 Videla pudo imponer en la Junta de Comandantes la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación, que augura el prolongado jaqueo a que sería sometido el segundo presidente del Proceso.

En suma, podría decirse que la política de orden empezó fracasando con las propias Fuerzas Armadas, pues la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco hizo para mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad. A pesar de eso, durante cinco años lograron asegurar una paz relativa debido a la escasa capacidad de respuesta del conjunto de la sociedad, en parte golpeada o amenazada por la represión y en parte dispuesta a tolerar mucho de un gobierno que, luego del caos, aseguraba un orden mínimo. Sólo hacia el fin del período de Videla, estimulados por la crisis económica y las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar, las voces de protesta comenzaron a elevarse.

Los empresarios apoyaron el Proceso desde el comienzo, pero a la distancia. Pese a las coincidencias había desconfianzas recíprocas: los militares atribuían a los empresarios parte de la responsabilidad del caos social que se habían propuesto modificar, y éstos, por su parte, estaban divididos en sus intereses.

Los específicamente beneficiados todavía no constituían un grupo orgánico, institucionalizado y con voz propia. Las voces corporativas (la Sociedad Rural, la Unión Industrial) criticaban aspectos específicos de las políticas económicas que las afectan y algunas políticas generales y carecían de unidad y fuerza para presionar en conjunto, y sólo empezaron a hacerlo cuando el régimen militar dio signos de debilidad y de disposición a la apertura. El general Viola, buscando tomar distancia de la política de Martínez de Hoz, convocó específicamente a los voceros de los grandes sectores empresarios y pero esa participación concluyó con su caída.

El movimiento sindical recibió duros golpes. La represión afectó a los activistas de base y a muchos dirigentes de primer nivel. Las principales fábricas fueron ocupadas militarmente, hubo "listas negras", para mantener alejados a los activistas, y control ideológico para los aspirantes a un empleo. La CGT y la mayoría de los

grandes sindicatos fueron intervenidos, se suprimieron el derecho de huelga y las negociaciones colectivas y los sindicatos fueron separados del manejo de las obras sociales. Privados casi de funciones los sindicatos hicieron oír poco su voz.

El gobierno mantuvo una mínima comunicación con los sindicalistas. Este espacio les permitió denunciar en el exterior las duras condiciones de los trabajadores y plantear al gobierno distintas cuestiones. Los sindicalistas se agruparon en dos tendencias: los dialoguistas y los combativos. A finales de 1980, los combativos constituyeron la CGT y eligieron como secretario general a Saúl Ubaldini. Por entonces, sus quejas se unían a las de los estudiantes o de algunos grupos de empresarios regionales. Las huelgas parciales se hicieron más frecuentes e intensas; el 30 de marzo de 1982 la CGT convocó, por primera vez desde 1975, a una movilización en la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió con violencia.

También la Iglesia modificó su comportamiento a medida que el régimen militar empezaba a dar muestras de debilidad. Al comienzo tuvo una actitud complaciente, y el gobierno estableció una asociación muy estrecha con la jerarquía eclesiástica. Pero en forma progresiva esta respuesta inicial fue dejando paso a otra más elaborada, influida por la orientación del nuevo papa Juan Pablo II. Revisando sus anteriores posiciones, la Iglesia se propuso renunciar a la injerencia directa en las cuestiones sociales o políticas y consagrarse a la evangelización de una sociedad excesivamente secularizada. En 1979, el Arzobispado de Buenos Aires impulsó la Pastoral Social para reconstruir el vínculo entre Iglesia y trabajadores. Las preocupaciones por las cuestiones morales o por la familia se extendían hacia los derechos individuales y la política: el documento "Iglesia y comunidad nacional", de 1981, afirmó los principios republicanos, indicó la opción de la Iglesia por la democracia, su apartamiento del régimen militar y su vinculación con los crecientes reclamos de la sociedad. El más notable de ellos fue el de los derechos humanos. (Madres de Plaza de Mayo. Desde finales de 1981, los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta. Se amplió un poco más la brecha por la que la opinión pública comenzaba a aparecer).

Este clima empezó a insuflar algo de vida a los partidos políticos. La veda política, impuesta en 1976, congeló la actividad partidaria. La prohibición política terminó en 1981. Los dispersos grupos de derecha fueron convocados para constituir una fuerza política oficialista por el propio gobierno, que enseñó su apertura política, mientras peronistas y radicales entablaron conversaciones con otros partidos menores que culminaron, a mediados de 1981, con la constitución de la Multipartidaria. Esta organización no tenía mayor vitalidad que la de los partidos que la integraban, anquilosados y poco representativos. Los partidos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia sometida a la tutela militar. Pero también ellos fueron elevando su tono, se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política e incorporaron las protestas de empresarios y sindicalistas o las de los DDHH, cuidando dejar abierta

la puerta para una salida concertada. Junto con las otras voces (sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales, y defensores de DDHH) fueron formando un coro que, a principios de 1982, era difícil de ignorar.

La guerra de las Malvinas y la crisis del régimen militar

Desde 1980, los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Les preocupaba la crisis económica, el aislamiento, la adversa opinión internacional y los enfrentamientos intestinos, que dificultan los acuerdos necesarios para la salida buscada. Las disidencias se manifestaron públicamente con la designación de Viola (a la que se opuso la Marina), se agudizaron en el largo período que media hasta su asunción, en marzo de 1981, y maduraron cuando fue evidente la decisión del nuevo presidente de modificar el rumbo de la política económica.

Viola procuró aliviar la situación de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y la devaluación de la moneda, y trató de concertar la política económica, incorporándose al gabinete. Tomó contacto con distintos políticos (los "amigos" del Proceso) y discutió con ellos las alternativas para una eventual y lejana transición, pero no logró organizar ningún apoyo consistente, ni atenuar la crisis económica. Lo hostigaban los sectores que habían rodeado a Martínez de Hoz, y distintos grupos militares lo acusaban de falta de firmeza en la conducción. A finales de 1981, una enfermedad de Viola dio la ocasión para su desplazamiento y reemplazo por el Gral Galtieri, quien retuvo su cargo de comandante en jefe del Ejército, modificando así la precaria institucionalidad que los jefes militares habían establecido.

Gobierno de Galtieri: Galtieri se presentó como el salvador del Proceso, el dirigente vigoroso capaz de conducirlo a un final victorioso. Se manifestó dispuesto a alinear al país con EE.UU y a apoyarlo en la guerra encubierta que libraba en América Central. El país contribuyó por entonces con asesores y armamentos y obtuvo de EE.UU el levantamiento de las sanciones que la administración de Carter había impuesto al país por las violaciones a los DDHH. Probablemente fue entonces cuando Galtieri concibió su destino de conductor de Arg hacia el mundo de las grandes potencias, protegido por su poderoso aliado. Designado presidente, Galtieri se lanzó a la política activa e intentó armar un movimiento en el que los "amigos políticos" sustentaran su propio liderazgo, mientras anunciaba vagamente una futura institucionalización. Su ministro de Economía, Alemán, se rodeó del equipo de Martínez de Hoz y retornó a la senda inicial, definiendo sus prioridades: "la desinflación, la desregulación y la desestatización". En lo inmediato, la recesión se agudizó, y con ella las protestas de sindicatos y empresarios. Así, el ímpetu de Galtieri chocó con resistencias y hasta con movilizaciones callejeras (la de la CGT)

Fue en ese contexto cuando se concibió y lanzó el plan de ocupar las islas Malvinas, que aparecía como la solución para los problemas del gobierno. La Argentina reclamaba a Inglaterra esas islas desde 1833, cuando fueron ocupadas por los británicos. En 1965, las Naciones Unidas habían dispuesto que ambos

países debían negociar sus diferencias. Los británicos hicieron poco para avanzar en ese sentido, mientras el gobierno Argentino se acercó a los habitantes de las islas y les suministró distintos servicios educativos y sanitarios. En el país existía un reclamo unánime, aunque no en las formas y en los medios para lograrlo. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar para lo que llamaban "recuperar las islas" permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar, de un golpe, la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme. Una acción militar tendría una segunda ventaja: encontrar una salida al atolladero que había creado la cuestión con Chile por el canal del Beagle. En 1971, los presidentes Lanusse y Allende habían acordado someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por aquel canal. En 1977, el laudo arbitral los otorgó a Chile, y el gobierno Argentino lo rechazó. En 1978, ambos países parecían dispuestos a dirimir la cuestión por las armas cuando decidieron aceptar la mediación del Papa.

Por entonces había cobrado forma definida entre los militares y sus amigos una corriente de opinión belicista, que arraigó en una veta del nacionalismo argentino y se alimentaba con vigorosos sentimientos chauvinistas. Diversas fantasías largamente acuñadas en el imaginario de la sociedad se sumaban a la nueva fantasía de "entrar en el Primer Mundo" mediante una política exterior "fuerte". Todo ello se sumaba al ya tradicional mesianismo militar y a la ingenuidad de sus estrategias. La agresión a Chile, bloqueada por la mediación papal, fue desplazada hacia Gran Bretaña. Ya en 1977, la Marina había planteado la propuesta de ocupar las islas, vetada por Videla y por Viola, que retomó apenas Galtieri asumió la presidencia. Luego del golpe de mano se contaba con el apoyo de EE.UU y la reacción de Gran Bretaña, que finalmente admitiría la ocupación, a cambio de todas las concesiones y compensaciones necesarias. En ninguna de las hipótesis entraba la posibilidad de una guerra.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas, luego de vencer la débil resistencia de las escasas tropas británicas. El hecho suscitó un amplio apoyo: la gente se reunió en la Plaza de Mayo y en las capitales provinciales. Todas las instituciones manifestaron su adhesión sin reserva. Los dirigentes políticos viajaron, junto con los jefes militares, para asistir a la asunción del nuevo gobernador militar de las islas, Gral Menéndez, y a la imposición de su nuevo nombre (Puerto Argentino) a su capital. La sociedad se alegraba de haber ganado una batalla, y se disponía a avanzar si era necesario hacia la guerra. Si triunfan, los militares habrían saldado sus deudas con la sociedad, al precio de conceder una cierta libertad para que se expresaran voces no regimentales.

La reacción fue sorprendentemente dura en GB, donde la primera ministra Margaret Thatcher se propuso sacar réditos políticos de una victoria militar. De inmediato se alistó una fuerza naval de importancia; el 17 de abril se iniciaba su marcha hacia las

Malvinas. GB obtuvo rápidamente la solidaridad de la Comunidad Europea y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró a la Argentina nación agresora y exigió el retiro de las tropas. Este poderoso bloque apenas era contrapesado por el latinoamericano solidario en lo declarativo, pero de poco peso militar.

Sin respaldos consistentes el gobierno militar se lanzó al juego grande del Primer Mundo. Suponían que la cuestión se resolvería por medio de una negociación, de modo que la reacción inglesa resultó inesperada. EE. UU, por medio del secretario de Estado Haig, trató de encontrar una salida negociada y una fórmula transaccional. El gobierno estuvo dispuesto a aceptar distintas condiciones, siempre que GB se comprometiera a reconocer la soberanía Arg sobre las islas, inaceptable para los británicos. El gobierno militar tampoco podía resignar lo que había proclamado como su objetivo fundamental. En los términos que ellos mismos habían planteado, cualquier otro resultado equivalía a una derrota.

El gobierno argentino fue víctima de un aislamiento diplomático creciente, agravado por los reclamos sobre violaciones a los DDHH. También intentó presionar a EEUU a través de la Organización de Estados Americanos. Los miembros mantuvieron su respaldo a Arg sin compromiso militar. Luego de un mes de intentar convencer a la Junta Militar, y en momentos en que empezaba el ataque británico a las islas, EEUU abandonó su mediación; el Senado votó sanciones económicas a la Arg y ofreció apoyo a Gran Bretaña. Cada vez más solo, el gobierno argentino buscó aliados imposibles que lo alejaban definitivamente de la ilusión de entrar al Primer Mundo.

En los últimos días de abril la Fuerza de Tareas británica, que había llegado a la zona de Malvinas, recuperó las islas Georgias. El 1 de mayo, comenzaron los ataques aéreos a las Malvinas, y al día siguiente un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano, con lo que la flota argentina optó por alejarse definitivamente del frente de guerra. Siguió luego un largo combate aeronaval: la aviación argentina causó importantes daños a la flota británica, pero no logró impedir que las islas quedaran aisladas del territorio continental. En ellas, los jefes militares habían ubicado cerca de diez mil soldados, escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad, y sobre todo sin planes, salvo resistir.

En medio del clima triunfalista empezaron a aparecer voces críticas: algunos reclamaban contra el alineamiento con regímenes comunistas; otros exigían profundizar los aspectos antiimperialistas del conflicto y atacar a los representantes locales de los agresores. En los actos de la CGT, volvieron a alzarse las voces agrias, mientras que dentro del radicalismo, cuya conducción oficial había apoyado la política de guerra, Alfonsín propuso la constitución de un gobierno civil de transición, que encabeza el ex presidente Illia. El 24 de mayo, los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. Comenzó el ataque final a Puerto Argentino, donde se había atrincherado la masa de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición se produjo el 14 de junio, 74 días después de iniciado el conflicto. Por entonces, los generales exigían a Galtieri su renuncia.

La vuelta de la democracia

La derrota agudizó la crisis del régimen militar e hizo públicos los conflictos hasta entonces disimulados. La cuestión de la responsabilidad de la derrota se resolvió finalmente. Se culpó a la Junta Militar. En lo inmediato, en medio de un conflicto entre las tres fuerzas, fue designado presidente el Gral Bignone, quien logró un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de institucionalización, sin plazos precisos.

El gobierno se proponía negociar la salida electoral y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones, futuras y pasadas: la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno y una garantía de que no se investigaron ni los actos de corrupción ni las responsabilidades en lo que empezaban a llamar la "guerra sucia", propuesta rechazada por la opinión pública y por los partidos, que convocaron poco después a una marcha civil en defensa de la democracia. La asistencia fue masiva y, casi de inmediato, el gobierno fijó la fecha de elecciones para fines de 1983. Pero no dejó de intentar cerrar el debate: un documento sobre los desaparecidos declaró que no había sobrevivientes; una ley estableció una autoamnistía, eximiéndose de cualquier eventual acusación. Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda. Sobre todo, debían enfrentarse con una sociedad que se enteraba de la existencia de vastos enterramientos de personas desconocidas, de centros clandestinos de detención, de denuncias realizadas por ex agentes; en suma, de una historia siniestra, de la que hasta entonces pocos habían querido saber.

Después de un largo letargo, la sociedad despertaba, y encontraba nuevas voces hasta entonces poco escuchadas (defensores de DDHH y las de las Madres de Plaza de Mayo). Las organizaciones de DDHH instalaron la cuestión de los desaparecidos y el reclamo de justicia. Impusieron a toda la práctica política una dimensión ética, un sentido del compromiso y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad por encima de las afiliaciones partidarias. A medida que la represión retrocedía, empezaron a aparecer nuevos protagonistas sociales, junto con otros que habían sobrevivido ocultándose. La crisis económica generó motivos movilizadores: impuestos, indexación, suba de alquileres, deudas impagas dejadas por una quiebra bancaria. El nuevo activismo social se manifestó en los campos más diversos. El activismo renació en las universidades, reclamando contra los cupos de ingreso o el arancelamiento, y en las fábricas, donde empezaron a constituirse las comisiones internas y la participación sindical.

La sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Nuevamente, los conflictos de la realidad aparecían transparentes, y la solución de los problemas era posible si se organizaban en una fuerza consistente. Pero a diferencia de la anterior primavera había un repudio total de la violencia o de cualquier forma velada de guerra y una confianza menor en la

posibilidad de encontrar una gran solución, única, radical y definitiva. También era menor la seguridad de que el amplio conjunto de demandas planteadas definiera un gran protagonista, como lo había sido el "pueblo peronista". En esa diversidad se nutrió la nueva democracia, pluralista y consensual.

Parte de este nuevo espíritu vino de la movilización sindical intensa: los sindicalistas reclamaron contra la crisis económica y en favor de la democracia. A lo largo de 1982 y 1983, hubo paros generales y huelgas parciales, en las que se destacaron los gremios estatales. Pero los sindicalistas pusieron sus mejores esfuerzos en la recuperación del control de los sindicatos intervenidos y la "normalización". Las distintas fracciones coincidieron en este objetivo. Su acción movilizadora fue perdiendo especificidad y concluyó en la lucha más: la recuperación de la democracia.

La democracia fue en primer lugar una ilusión, luego del doble sacudón de la crisis económica y la derrota militar, la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y frustraciones. Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas del juego y de sus valores y principios más generales, de la democracia y también de la república. Ese conocimiento vago y aproximativo facilitó que se encabalaran en la nueva ilusión quienes nunca habían creído en ella. Pero se la aprendió con intensidad y se la puso en práctica pronto. La afiliación a los partidos políticos (luego de que el gobierno levantó definitivamente la veda) fue masiva. Las movilizaciones en defensa de la democracia eran la expresión de una voluntad colectiva: mostrarse y reconocerse como integrantes de la civilidad. La afiliación masiva transformó a los partidos políticos. Hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o las unidades básicas. También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron quienes venían de militar en organizaciones juveniles o estudiantiles (Ej Coordinadora radical) e intelectuales, que renovaron los temas de la discusión.

Las transformaciones del peronismo fueron notables, pues el viejo movimiento empezó a convertirse en un aceptable partido. El partido combinó la organización territorial con la sindical. Tímidamente, aparecieron las formas participativas y los temas democráticos, que nunca habían sido el fuerte del movimiento. Los viejos caudillos provinciales compartieron las decisiones con el metalúrgico Lorenzo Miguel, jefe de las 62 Organizaciones, y Herminio Iglesias fue candidato a gobernador de la Prov de Bs.As. El candidato a presidente fue Ítalo Luder, que no pudo disipar la desconfianza suscitada por el peronismo en sectores importantes de la sociedad.

El radicalismo se renovó por impulso de Raúl Alfonsín, que en 1972 había creado el Movimiento de Renovación y Cambio para disputarle el liderazgo a Balbín. Durante el Proceso se distinguió del resto de los políticos, criticó a los militares, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó involucrarse en la guerra de Malvinas. Desde el fin de la guerra, su ascenso fue vertiginoso y en la puja interna le permitió derrotar a los herederos de Balbín. Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la

sociedad y el Estado, discurso que atrajo al partido a una masa de afiliados y simpatizantes. Radicales y peronistas cosecharon amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. A la derecha, como siempre, fue difícil unificar las fuerzas. Muchas de ellas habían militado entre los "amigos" del Proceso. A la izquierda, el Partido Intransigente logró reunir un amplio y heterogéneo espectro de simpatizantes, que, aunque compartían muchas de sus propuestas, eran reacios al dirigente radical.

Alimentados por la movilización de la sociedad y por esta primavera de los pueblos, los partidos tuvieron dificultades para dar completa cabida a las múltiples demandas y no llegaron a constituir plenamente un espacio de negociación de los intereses. Las organizaciones de derechos humanos fueron cada vez más intransigentes en un reclamo que los partidos intentaban traducir en términos aceptables para el juego político. La misma dificultad se manifestó respecto de los intereses sociales más estructurados, como los sindicales o los empresarios, que prefirieron canalizar sus demandas por los cauces corporativos tradicionales.

No era un problema inquietante por entonces, pues en la sociedad se manifestaba una entusiasta adhesión a una democracia que entendía como la primacía de la civilidad. Las formas de hacer política del pasado reciente dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, el respeto de las formas institucionales y una subordinación de la práctica política a la ética. Celebrando la novedad se sobrevaloraba la eficacia de este instrumento. Para cuidarlo, nutrirlo y fortalecerlo, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del sistema. Se postergó una dimensión esencial de la práctica política: la discusión de programas y opciones y se confió sólo en el poder de la civilidad unida. Esta combinación de la valoración de la civilidad con un fuerte voluntarismo derivó en un cierto facilismo, en una especie de "democracia boba", aséptica y conformista.

Los problemas se verían más adelante. Por el momento, la civilidad vivió plenamente su ilusión, y acompañó al candidato que mejor captó ese estado de ánimo colectivo. El peronismo encaró su campaña con mucho del viejo estilo, convocando a la liberación contra la dependencia, apeló a lo peor de su folclore político y pagó los costos. Raúl Alfonsín, en cambio, recurrió en primer lugar a la Constitución, cuyo Preámbulo era un "rezo laico". Agregó una apelación a la transformación de la sociedad, que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al régimen militar, aseguró que se haría justicia con los responsables y denunció un espurio pacto de impunidad entre militares y sindicalistas. Sobre todo aseguró que la democracia no sólo podía resolver los problemas de largo, sino también satisfacer la masa de demandas acumuladas y prestas a plantearse. La mayoría de la sociedad le creyó, y el radicalismo superó holgadamente al peronismo, que por 1era vez perdía una elección nacional.